

Rafael Correa: el antes y el después de la política ecuatoriana

Santiago Basabe-Serrano

La política ecuatoriana posterior al retorno a la democracia, en 1979, tiene dos momentos claves: el anterior al presidente Correa y el que se inaugura con la llamada “Revolución Ciudadana”. Nada es igual después de Correa y seguramente el recuerdo de su gestión será difícilmente borrado de la memoria de la ciudadanía, al menos durante las próximas décadas. Correa ha roto con la tradición del presidente que a pocos meses de su mandato ostenta niveles muy bajos de aprobación, también ha desbancado en buena medida a la llamada “partidocracia”, aunque se ha nutrido en los inicios de su gestión de algunas de sus figuras más excelsas; en fin, la comprensión de la política ecuatoriana tiene un antes y un después del presidente Correa. Muchos aciertos pero también limitaciones importantes han marcado su gestión; no obstante, a criterio de la población el balance sigue siendo favorable al jefe de Estado.

Frontal o tácitamente, los políticos le temen, sus allegados lo escuchan y prestan atención a sus instrucciones para no ser vilipendiados públicamente mientras que los medios de comunicación cada vez se resignan más en la lucha abierta que mantienen con el gobierno desde el inicio del período Correa, allá por enero de 2007. En definitiva, Correa ha revolucionado la política del país, sea por su estilo caudillesco y mesiánico, sea por la veneración casi religiosa de sus partidarios, sea por las limitadas opciones de juego político que ha dejado para sus contendientes electorales. Dentro del contexto latinoamericano

de presidentes “progresistas” –nadie puede definir de forma clara a qué se refieren con dicha expresión–, Correa ocupa una posición privilegiada: se exalta, demanda por la soberanía perdida y afianza el estribillo de la lucha contra el imperialismo norteamericano y la “larga noche neo liberal” –aun cuando Ecuador fue uno de los países menos cercanos a políticas de ajuste estructural–. En definitiva, el presidente Correa marca dos tiempos en la comprensión de la política nacional.

Este artículo hace un balance de los dos momentos por los que ha circulado el fenómeno Correa en sus seis años de gobierno y plantea una prospectiva de lo que serán sus cuatro años venideros, y quizá los últimos, si la Constitución del país no es reformada en el camino. En esencia, se plantea que el gobierno de la “Revolución Ciudadana” pasó por una corta etapa de transición entre 2007 y 2009, se asentó en el poder entre 2009 y 2012; y, avizora un horizonte de estabilización económica y consolidación de la hegemonía presidencial en lo que resta de 2013 y mayo de 2017. Aunque algunas explicaciones del fenómeno Correa señalan que su popularidad se debe a los grandes remanentes petroleros que mantiene el país y a una Constitución con amplios poderes para el Ejecutivo, lo que aquí se sostiene es que esas dos variables son insuficientes para entender lo que sucede hoy por hoy en Ecuador. Más allá de eso, el presidente Correa arrasó con las lógicas de la política previa al 2007 porque aprendió de sus antecesores. Evitó caer en los errores del pasado y a su vez replicó las estrategias que fueron útiles a otros gobernantes.

La primera etapa: la necesaria transición

Cuando Rafael Correa llega a la presidencia a fines de 2006 es un actor político

de aquellos que se conoce como *outsider*. Sin un pasado político que lo cobije, sin estructura partidista que lo respalde y desconocedor de las lógicas de cómo se hace la política “por dentro”, su primera etapa tiene como objetivo mantenerse en el poder y dar pasos seguros hacia la generación de un proyecto político propio. Para ello, cuenta solamente con algunos consejeros con cierta experiencia, pero sobre todo con una gran capacidad para comprender que, para allanar el camino, es necesario no solo jugar con las armas de sus opositores sino también servirse de ellos, aun cuando los cuestione por ser parte del oprobioso pasado al que la ciudadanía no desea volver. Así se entienden algunas de sus primeras designaciones en cargos ministeriales y en el círculo cercano del poder. Era necesario combatir el sistema político a través de quienes conocían cómo funcionaba la maquinaria y sus vicios. La destitución de 57 legisladores y su sustitución por los famosos “diputados de los manteles” –un grupo de diputados alternos que al ser hallados *in fraganti* en conversaciones con funcionarios del gobierno no encontraron mejor alternativa para salir del paso que cubrir sus rostros con los manteles de la hostería en la que fueron enfrentados por las cámaras– o la cuestionada destitución de los vocales del Tribunal Constitucional (TC) son algunas de las imágenes que refieren el momento político suscitado entre 2007 y 2008.

Con una legislatura a su favor –al menos temporalmente– y con nuevos integrantes del TC, el proyecto de una nueva Constitución política quedó expedito. Adicionalmente, el juego de ganancias compartidas que planteó el presidente Correa a los actores políticos se verificó de forma plena: los aliados estratégicos del momento mantuvieron espacios de poder mientras que quienes se iban sumando al proyecto –sobre todo dirigentes de organizaciones del

tercer sector y actores sociales– se empezaron a frotar las manos pues lo que hasta el momento había sido solamente parte de sus demandas reivindicativas en las calles ahora tenía la posibilidad de convertirse en mandato constitucional. De su lado, una oposición miope al proyecto político en curso no halló mejor salida que oponerse a rajatabla al nuevo diseño constitucional. Como resultado, las elecciones para constituyentes dieron paso a un avasallador triunfo del oficialista Movimiento Alianza País.

Ya en Montecristi –ciudad costera en la que se desarrolló la Asamblea Constituyente–, las lógicas de la política empezaron a modificarse, aunque no del todo. Este era el primer espacio de cosecha del presidente pero también de distribución de recursos entre sus nuevos aliados. Allí estaban desde maoístas ortodoxos hasta antiguos alineados con el derechista Partido Social Cristiano, pasando también por ambientalistas, defensores de Derechos Humanos, indigenistas, académicos de izquierda y laicos provenientes de la Teología de la Liberación. Ese *collage* de ideas y demandas reivindicativas se plasmó en la Constitución de 2008: un cuerpo normativo de 444 artículos en el que se reflejó lo que era Alianza País en ese momento. Aunque el presidente Correa dimensionaba lo que implicaba para la gobernabilidad lo expresado en Montecristi, sabía también que la etapa de transición requería amalgamar un grupo de nuevos actores políticos que le permitiese irse despojando de a poco de sus furtivas alianzas con los otrora dueños del poder. En política hay que saber distribuir recursos materiales y simbólicos y al mismo tiempo persuadir a los aliados en la idea de que son ellos quienes encarnan el poder, aun cuando las riendas sigan bajo la custodia de una sola persona. Esa fue la primera gran lección de la política tradicional que el presidente Correa capturó y la puso en práctica.

Con una Constitución pensada en función de los intereses de Alianza País, la oposición tardó en dimensionar la fortaleza del discurso del presidente Correa y su capacidad de seducción popular. Tanto les costó entender esto a los opositores que recién en los comicios presidenciales de 2013 se percataron de que la estrategia de atacar al presidente en función del discurso de la democracia liberal representativa lo único que provocaba era fortalecer la gestión gubernamental. De su lado, quienes hasta ese momento habían concentrado sus esfuerzos en la movilización social en las calles ahora gozaban de espacios de poder en ministerios, subsecretarías y representaciones diplomáticas. Si en el plano de la política formal el presidente Correa iniciaba la construcción de una nueva clase política afin a su proyecto, en el campo de la política informal sus principales aliados eran merecedores de cuotas de poder a través del viejo mecanismo de la cooptación. De esta forma, el presidente aprendió otra de las lecciones de oro de la política latinoamericana: la protesta social y sus líderes constituyen un factor clave en la desestabilización institucional de los gobiernos, cuando no de las caídas presidenciales, por lo que mantenerlos cerca del poder vincula cada vez más la esfera de lo público a la esfera de lo estatal, hasta convertirlas en una sola.

La segunda etapa: sedimentando el camino de la “Revolución Ciudadana”

Con todas las condiciones políticas a su favor, el segundo período del presidente Correa está marcado por el énfasis otorgado a la estrategia de la “diferenciación”. Dado que las agrupaciones partidistas y sus líderes prácticamente han desaparecido, el nuevo “enemigo” político son los medios de comunicación. En efecto, dado

que la arena política se encuentra vacía de contradictores, la estrategia del presidente Correa consistió en situar en dicho rol a los periodistas y en general a quienes hacían opinión pública a través de prensa, radio y televisión. Necesitado de diferenciar su gobierno y su liderazgo de todo lo que no constituye “el pueblo”, al que el presidente Correa representa de forma exclusiva, los ataques a los medios de comunicación se hicieron cada vez más virulentos hasta el punto de enjuiciar y sentenciar económica y penalmente al editor de política, al medio de comunicación y a los propietarios del diario *El Universo*, el matutino de mayor circulación nacional. En este escenario de confrontación pura entre el presidente Correa y los periodistas —que constituye casi un ejemplo de texto del “juego de la gallina”—, la peor parte la llevaron estos últimos. El gran error de los medios de comunicación fue, en definitiva, caer en la tentación de asumir un rol político que en realidad no les correspondía. Aquí hay otro caso de lecciones aprendidas por el presidente Correa: a diferencia de sus antecesores, que se ocuparon poco de comunicar de forma secuencial y eficiente, su gobierno se ha caracterizado por emitir mensajes cotidianos sobre la actividad presidencial y sobre las opiniones de periodistas con los que el gobierno discrepa.

Por otro lado, en esta etapa de asentamiento del proyecto político del presidente Correa se observaron las primeras rupturas con quienes habían sido sus allegados al inicio del gobierno. Los grupos ecologistas —con el ex candidato presidencial Alberto Acosta a la cabeza—, las izquierdas más extremistas —como el Movimiento Popular Democrático— y la organización indigenista Pachacutick terminaron alejándose del gobierno con fuertes críticas. “Derechización” del proyecto y “nuevo desarrollismo extractivo” son los principales argumentos esgrimidos por estos

sectores para fundamentar su distanciamiento del presidente Correa. Aunque sin desconocer los efectos que estas desmembraciones pudieron ocasionar al gobierno, el hecho es que buena parte de la organización social y de las organizaciones del tercer sector se quedaron junto al presidente Correa y ahora son parte de comitivas oficiales. Así, la posibilidad de que los disidentes estén en capacidad real de articular protesta social en las calles es cada vez menos factible.

Junto a las prácticas de cooptación ya mencionadas –y que se materializan vía Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; y, Secretaría Nacional de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana–, otra de las estrategias utilizadas por el presidente Correa durante este período fue la captura del Poder Judicial y de la Corte Constitucional. De esta forma, a través del inicio de procesos penales y órdenes de prisión preventiva, mucha de la disidencia que aún quedaba fue replegándose de a poco. En este aspecto, nuevamente el presidente Correa aprendió del pasado político del país: es necesario controlar las cortes de justicia para poder manejar los hilos de la política. Este recurso, utilizado fundamentalmente por el ex presidente Febres Cordero a lo largo de su vida política, ha sido maximizado por el actual mandatario. De hecho, su ex ministro del Interior y luego secretario particular es ahora quien dirige el Consejo de la Judicatura, órgano encargado de la administración del Poder Judicial.

En el plano económico, el gobierno del presidente Correa gozó de altos precios del barril de petróleo y de cuantiosos créditos –aunque en condiciones no muy favorables– que le permitieron resolver conflictos redistributivos, ampliar su agenda de políticas sociales y generar una economía basada en el aparato estatal y sus dinámicas. A la par, las compensaciones sociales a los

quintiles con menos ingresos económicos –el llamado bono de desarrollo humano– y otras de carácter remedial –como el bono de la vivienda–, fueron incrementadas. De su lado, los subsidios a los derivados del petróleo se mantuvieron sin variación. De esta forma, al existir recursos económicos para distribuirlos entre todos los sectores, la decisión de quedarse fuera de la lógica del gobierno no era fácil de asumir para los sectores políticos, sociales, empresariales y aun para los medios de comunicación privada, algunos de los que ahora mismo son cercanos al gobierno nacional.

No obstante, el período de sedimentación del presidente Correa se ha dado también en función de plantear políticas orientadas a variar las preferencias de la ciudadanía y sus horizontes de desarrollo. Específicamente, la discusión instalada sobre las diversidades sexuales, la unión libre entre personas del mismo sexo o el uso de medicamentos anticonceptivos –la píldora del día después, propuesto por una ministra de Salud declarada públicamente lesbiana y quizá una de las actrices más emprendedoras y liberales del gobierno–, han marcado un espacio de debate antes inexistente. Por otro lado, la política de financiar estudios de posgrado en el exterior, auspiciada por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, constituye otro de los elementos de juicio relacionados con la intencionalidad gubernamental de establecer puntos de partida para modificar los códigos de relacionamiento cultural de una sociedad tradicionalmente conservadora, excluyente y permeada de élites renuentes al ascenso social de quienes no son parte de sus círculos. En definitiva, la gran cantidad de recursos económicos, el interés hacia las políticas sociales y la no menor atención a la vialidad e inversión en infraestructura, dan cuenta de un proyecto enraizado en la ciudadanía durante los cuatro años mencionados. A pesar de las

críticas existentes por la relativización de los principios de la democracia y la ausencia de tolerancia política del presidente Correa, el electorado prioriza los logros ya mencionados y así lo ha expresado en las urnas.

La tercera etapa: la estabilización

Luego del triunfo electoral de inicios de 2013, el presidente Correa no solo ha consolidado su liderazgo, además tendrá una bancada legislativa que supera las dos terceras partes del total de asambleístas –100 de 137 asientos–. De esta forma, el camino se encuentra allanado para aprobar una serie de leyes que han sido parte del déficit gubernamental –como la ley de tierras y la de aguas– y también para poner en vigencia otras que no alcanzaron consensos durante estos años, como la controversial ley de comunicación. De otro lado, al no requerir de coaliciones de gobierno, las responsabilidades por la calidad y eficiencia de la producción legislativa recaerán únicamente sobre Alianza País, aumentando así los niveles de rendición de cuentas del movimiento oficialista frente al electorado.

En el plano económico no se encuentran razones para pensar en un giro específico. La lógica de distribuir recursos económicos de forma indiscriminada ha sido uno de los baluartes del gobierno y, en contraprestación, le ha generado dividendos electorales considerables. De hecho, la ya diluida iniciativa ITT –consistente en dejar petróleo bajo tierra a cambio de recursos provenientes de países interesados en la conservación ambiental– prácticamente será sepultada con el inicio de la nueva administración Correa. Más aún, los proyectos de explotación minera que ahora mismo se debaten estarían orientados a establecer una nueva fuente de generación

de recursos que permita continuar en la lógica de alimentar la economía desde el aparato estatal. No obstante, algunas variaciones se esperarían. A pesar de la cantidad de recursos económicos que ahora mismo fluyen, parecería que el presidente Correa optará por una política de mayor control en cuanto al direccionamiento de los recursos públicos. En esa línea se puede entender el Decreto Ejecutivo firmado durante estos días y que dispone el congelamiento de los sueldos de los altos funcionarios del Estado durante los próximos dos años. El control del gasto público y la extracción de recursos de forma rápida y en buenas cantidades a través de la minería a gran escala serían las dos tareas en las que se concentrará el próximo vicepresidente, Jorge Glass.

En el plano político, la recurrencia a los medios de comunicación privados como el “otro” de la política se mantendrá inalterada. Dada la ausencia de líderes de oposición con reales posibilidades electorales, la relación amigo-enemigo debe seguir en pie con prensa, radio y televisión. En el plano internacional, una arista no mencionada aún, las características del gobierno entrante se dispondrán en concordancia con lo hecho hasta el momento: acumulación de capital mediático y simbólico a través de declaraciones altisonantes pero, en lo de fondo, con muy poca capacidad de negociación y de acuerdo a nivel regional. Bajo esta lógica de buscar el reordenamiento internacional para de allí generar acercamientos con países con los que tradicionalmente el Ecuador no ha mantenido cercanía, las declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ecuador o los reportes de Human Rights Watch, Freedom House o cualquier otra organización de este tipo lo que hacen es alimentar la visión contrahegemónica del gobierno.

Finalmente, las dificultades para mejorar los índices de empleo y la escalada de inseguridad en sus distintas facetas continuarán siendo los fantasmas del gobierno en el nuevo período. Frente al primer tema la salida más inmediata es el incremento de espacios en el sector público aunque esto tensiona con la necesidad de austeridad ya señalada. En todo caso, el empleo será un campo que se lo puede manejar mediante políticas coyunturales. Respecto a la inseguridad, la situación es más delicada. Durante todo el período, desde 2007, el presidente Correa ha ensayado una serie de estrategias —y ministros—, todas ineficientes al momento de observar resultados. En este juego de ensayo-error, la última decisión es modificar el Código Penal, esencialmente en lo que se refiere al incremento de las penas. En ese aspecto, la visión ideológica del presidente Correa se orienta por los postulados de la derecha conservadora ecuatoriana, anclada alrededor del Partido Social Cristiano, que ve en el endurecimiento de las sanciones un mecanismo reductor de conflictividad social y de la tasa de delitos.

En resumen, el presidente Correa aprendió bien de las lecciones de la vieja “partidocracia”, a la que dice atacar. Cultivó a la par un grupo de nuevos miembros de la élite política que le apoya en el gobierno y, finalmente, siguió la lógica de distribución de recursos entre todos quienes a él se acercan, independientemente de que sean de derechas, izquierdas, liberales, conservadores, laicos o religiosos. De esta forma, el presidente Correa ha logrado conformar una maquinaria electoral que circula alrededor de su nombre e imagen. No queda duda pues que la política ecuatoriana con el presidente Correa ya no es la misma: ganó en estabilidad y ahora lo hará en fluidez en las relaciones Ejecutivo-Legislativo. A cambio, el país perdió la poca institucionalidad democrática que tenía, avivó la intolerancia no solo política sino en todos los espacios sociales y ratificó los liderazgos caudillistas en los que la organización partidista es solamente una fachada. Esa es la panorámica del Ecuador actual. Ese es el tipo de país que la población ha decidido apoyar mayoritariamente en las urnas.